

# SPECIAL REPORT

N. ° 482 | JUNIO 2021

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE [www.usip.org](http://www.usip.org)

## Frenar la corrupción después del conflicto: movilización anticorrupción en Guatemala

Por *Walter Flores y Miranda Rivers*



Líderes indígenas muestran su apoyo a Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 29 de agosto de 2017. (Foto de Moisés Castillo/AP)

### Contenidos

Introducción .....	3
Contexto histórico .....	4
2015: un nuevo despertar cívico para frenar la corrupción .....	7
Obstáculos y reveses desde 2015 .....	10
El movimiento anticorrupción hoy .....	14
Recomendaciones para los actores externos .....	16

### Resumen

- Guatemala tiene una larga historia de conflictos violentos, y la corrupción ha sido un impulsor clave de esa violencia. El crimen organizado y los grupos de seguridad clandestinos están estrechamente vinculados con los políticos y las instituciones gubernamentales.
- El movimiento para fomentar la transparencia, la responsabilidad y la gobernanza democrática en Guatemala alcanzó su punto más alto en 2015, cuando el presidente y la vicepresidenta del país se vieron obligados a renunciar, pero muchos grupos de la sociedad civil continúan promoviendo una agenda anticorrupción.
- Desde entonces, el movimiento ha sufrido la contraofensiva de políticos y miembros de la élite económica de Guatemala, y los esfuerzos para erradicar la corrupción se han visto obstaculizados por una creciente polarización ideológica dentro del movimiento y en el seno de la sociedad guatemalteca en su conjunto.
- En 2019, el presidente Jimmy Morales expulsó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No está claro si el nuevo gobierno del presidente Alejandro Giammattei obstruirá o apoyará los esfuerzos anticorrupción.
- A pesar de estos desafíos, los actores externos, incluidos los donantes internacionales, pueden ayudar a reforzar el trabajo de quienes combaten la corrupción.



UNITED STATES  
INSTITUTE OF PEACE  
Making Peace Possible

# SPECIAL REPORT

N. ° 482 | JUNIO 2021



## ACERCA DEL INFORME

Este informe analiza la movilización cívica para combatir la corrupción en Guatemala, con eje en el movimiento que surgió en 2015. Se basó en una revisión bibliográfica integral, una serie de coloquios de grupos focales y cuarenta entrevistas exhaustivas con actores y organizaciones de movimientos sociales en Guatemala entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. El informe contó con el apoyo de la US State Department's Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos).

## ACERCA DE LOS AUTORES

Walter Flores es investigador internacional en las áreas de sistemas de salud, responsabilidad y participación ciudadana en políticas y servicios públicos. Miranda Rivers es especialista en programas del Programa de Acción No Violenta del USIP, donde se centra en la investigación aplicada y la capacitación y educación.

Los puntos de vista que se expresan en este informe son los de los autores únicamente. No reflejan necesariamente las opiniones del United States Institute of Peace (Instituto de la Paz de los Estados Unidos). En nuestro sitio web ([www.usip.org](http://www.usip.org)) encontrará una edición en línea de este informe e informes relacionados, junto con información adicional sobre el tema.

© 2021 United States Institute of Peace (Instituto de la Paz de los Estados Unidos)

### United States Institute of Peace

2301 Constitution Avenue, NW  
Washington, DC 20037

Teléfono: 202.457.1700

Fax: 202.429.6063

Correo electrónico: [usip\\_requests@usip.org](mailto:usip_requests@usip.org)

Sitio web: [www.usip.org](http://www.usip.org)

Informe especial n. ° 482. Publicado por primera vez en inglés en 2020.

ISBN: 978-1-60127-848-7



**UNITED STATES  
INSTITUTE OF PEACE**  
Making Peace Possible



Un niño ondea la bandera guatemalteca durante una vigilia frente a la Corte Suprema en la Ciudad de Guatemala el 22 de julio de 2015.  
(Foto de Luis Soto/AP)

## Introducción

En 2018, el presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció abruptamente que pondría fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (conocida por su sigla CICIG), un organismo independiente establecido mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas en 2006. La comisión estaba encargada de ayudar a las instituciones del estado en la investigación y el desmantelamiento de grupos de seguridad ilegales y organizaciones de seguridad clandestinas que desde hacía tiempo amenazaban la democracia y la paz en Guatemala. Durante más de una década, la CICIG trabajó junto a la Oficina de la Fiscalía General de Guatemala, y amplió su enfoque para incluir una variedad de casos de corrupción notorios. Su investigación más destacada llevó a la renuncia y el encarcelamiento del predecesor de Morales, el presidente Otto Pérez Molina, en 2015. Después de que el propio Morales se convirtiera en el blanco de una investigación de la CICIG, su gobierno inició una serie de ataques contra la comisión para finalmente expulsarla en septiembre de 2019.

Los ataques del gobierno contra los comisionados anticorrupción provocaron acciones masivas a nivel nacional, con protestas, manifestaciones y bloqueos de carreteras generalizados. JusticiaYa, un movimiento social no violento, movilizó a ciudadanos de todo el país para participar en estas iniciativas. Grupos indígenas organizaron bloqueos de carreteras que involucraron a miles de personas y participaron en otras formas de acción directa. Diversos gobiernos extranjeros e instituciones multilaterales expresaron su preocupación por las acciones de Morales. Pero el presidente no se dejó intimidar y su gobierno avanzó con la expulsión de la CICIG de Guatemala. La CICIG publicó su informe final el 20 de agosto de 2019 y cesó las actividades al mes siguiente. La desaparición de la comisión



representó un gran obstáculo en las tareas por contrarrestar la corrupción y la impunidad en Guatemala, un país que ocupa el puesto 146 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparency International (Transparencia Internacional).<sup>1</sup> Es un ejemplo grave de resistencia por parte de las élites políticas contra los esfuerzos ampliamente respaldados para combatir la corrupción. También ilustra el poder y las limitaciones de la acción no violenta para fomentar la transparencia, la responsabilidad y, en última instancia, la gobernanza democrática.

Este informe analiza la lucha contra la corrupción en Guatemala llevada a cabo por movimientos sociales en los últimos cinco años, y se hace foco en sus principales éxitos y desafíos. Para este informe, los movimientos sociales se definen como una amplia gama de entidades que actúan colectivamente con el fin de alcanzar objetivos orientados al cambio. Los movimientos a menudo abarcan agrupaciones dinámicas conformadas por diferentes actores, e incluyen personas, organizaciones, coaliciones y redes que utilizan métodos extrainstitucionales, como protestas, boicots y manifestaciones para lograr cambios sociales, políticos y económicos. En este informe también se detallan los efectos del apoyo de los donantes a dichas entidades en relación con la movilización ciudadana. Se sostiene que, si bien el movimiento centrado en la transparencia, la responsabilidad y la buena gobernanza (TRBG) en Guatemala ha sufrido importantes contratiempos, incluido el hecho de no priorizar las reformas estructurales como los cambios en el sistema político y judicial del país, sigue habiendo un sector activo de la sociedad civil que promueve la agenda de TRBG: un sector que puede beneficiarse del compromiso internacional. Guatemala, tras haber sido devastada por la guerra civil entre 1960 y 1996, sigue caracterizándose por el crimen organizado, la captura del estado, la pobreza y la violencia. Por lo tanto, las lecciones aprendidas de los esfuerzos de los movimientos sociales para lograr un cambio positivo en Guatemala pueden aplicarse a otros movimientos del mundo que se encuentran en contextos similares. Las lecciones también tienen mayor relevancia para los actores internacionales que ayudan a los estados a reconstruir la paz y la gobernanza democrática luego de un conflicto violento prolongado.

El informe se basa en una exhaustiva revisión de documentos y quince entrevistas con informantes clave que participaron directamente en la movilización masiva sin precedentes de 2015 en Guatemala. Dichas entrevistas se realizaron entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Adicionalmente, se llevaron a cabo veinticinco entrevistas en la capital, la Ciudad de Guatemala, y los departamentos rurales de Quetzaltenango y Alta Verapaz con activistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros agentes de movimientos sociales, todos ellos con al menos cinco años de experiencia en temas inherentes a TRBG en Guatemala. Estas entrevistas tuvieron lugar entre mayo y noviembre de 2019. En el informe también se utilizan los resultados de cuatro coloquios de grupos focales que se celebraron en la Ciudad de Guatemala con representantes de OSC y miembros de comisiones municipales en mayo, junio y julio de 2019.

## Contexto histórico

Los movimientos sociales y la movilización ciudadana tienen una larga historia en Guatemala. La profunda desigualdad, arraigada en el país desde la época colonial, ha resultado en la opresión y la explotación de la población indígena. Los indígenas han respondido mediante la creación de movimientos para exigir un mayor acceso a la tierra y el respeto de su cultura.<sup>2</sup> Los movimientos sociales en torno a los derechos de los trabajadores también han sido influyentes en diferentes momentos de la historia de Guatemala, especialmente durante la llamada primavera democrática que prosperó entre 1944 y 1954 y la movilización contra las políticas neoliberales de la década de 1990 y principios de la década del 2000.<sup>3</sup>



Una observadora de la Oficina de la Defensoría de Derechos Humanos, en el centro, se une a una línea policial que separa las manifestaciones a favor y en contra de Iván Velásquez, jefe de la CICIG, frente a la oficina de la ONU en la Ciudad de Guatemala el 28 de agosto de 2017. (Foto de Moisés Castillo/AP)

Los orígenes de la movilización cívica, específicamente en torno a los objetivos de TRBG, radican en la devastadora guerra civil de Guatemala, que duró desde 1960 hasta 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada en 1994 en el contexto de un acuerdo de paz entre las partes en guerra, estimó que 200,000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto, la mayoría de las cuales eran indígenas. La comisión de la verdad y reconciliación del país informó que las fuerzas estatales y grupos paramilitares relacionados fueron responsables de más del 90 por ciento de las violaciones documentadas. Las masacres y la destrucción de aldeas generaron el desplazamiento forzado de la población civil dentro y fuera del país. Según la CEH, aproximadamente un millón y medio de personas fueron desplazadas durante la fase más violenta del conflicto armado.<sup>4</sup> En total, más de una cuarta parte de la población total del país se vio afectada por la violencia política, en la forma de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros o desplazamientos forzosos de sus hogares.<sup>5</sup>

La movilización social liderada en gran parte por grupos indígenas y campesinos, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores y otros, alcanzó su punto máximo al mismo tiempo que la violencia, entre 1978 y 1982 aproximadamente. Un grupo influyente fue el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Esta organización estaba formada por un grupo de mujeres, tanto indígenas como no indígenas, cuyos familiares habían desaparecido forzosamente y que se dedicaban a actuar contra los abusos a los derechos humanos cometidos durante la guerra. En 1984, organizaron una importante marcha de 100,000 personas en

El movimiento por los derechos humanos logró importantes éxitos durante la guerra e inmediatamente después, y su movilización masiva y compromiso con las tácticas de acción no violenta tuvieron un papel clave en la creación de la CEH y las instituciones públicas.

la sede de la Policía Nacional y la Catedral Metropolitana en la Ciudad de Guatemala.<sup>6</sup> El GAM también lideró ocupaciones del Congreso y el Ministerio de Justicia, en las que exigía la creación de una comisión para investigar decenas de miles de desapariciones. Junto a otros grupos, el GAM desempeñó un papel clave durante el conflicto mediante el control de los abusos militares. Otro grupo destacado en ese momento fue el Comité de Unidad Campesina, una organización laboral que organizó huelgas, marchas, bloqueos de carreteras y otras

manifestaciones no violentas para proteger y promover los derechos de las personas que viven en áreas rurales. Después de las conversaciones de paz y la posterior firma de los Acuerdos de Paz en 1996, muchos grupos de derechos humanos pasaron de controlar y documentar actos de violencia a ayudar con la administración de las reparaciones de guerra.<sup>7</sup> La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, una confederación de grupos de derechos humanos, definió mecanismos para identificar a las víctimas y garantizar la transferencia de fondos a las comunidades más necesitadas después de la guerra.

El movimiento por los derechos humanos que surgió durante el período más violento de la guerra sigue activo en la actualidad e incluye líderes reconocidos internacionalmente, como Helen Mack, Rigoberta Menchú, Rosalina Tuyuc y María Elena Farfán. El movimiento exigió acciones contra los crímenes de guerra y lideró los esfuerzos para llevar estos casos al sistema judicial guatemalteco.<sup>8</sup> Sin embargo, después del conflicto, las instituciones estatales tenían capacidad y recursos limitados para realizar investigaciones y faltaba voluntad política para hacerlo. Los ciudadanos formaron sus propios grupos para llevar a cabo las investigaciones y “generaron inteligencia” a fin de que el movimiento pudiera elaborar casos legales sólidos y formular demandas concretas de responsabilidad, según un defensor de derechos humanos entrevistado para este estudio.<sup>9</sup> Posteriormente, el movimiento amplió su enfoque para incluir la eliminación de la impunidad después de que quedó claro que esta era una barrera importante para promover las demandas de derechos humanos.

El enfoque del movimiento en la verdad y la justicia respecto del personal militar y civil acusado de violaciones de los derechos humanos fue fundamentalmente una demanda de responsabilidad por parte del gobierno, que se ajusta a la agenda de TRBG en Guatemala hoy en día. Esa demanda estaba vinculada con la labor para promover reformas estructurales en el aparato de seguridad e inteligencia. El movimiento por los derechos humanos logró importantes victorias durante la guerra e inmediatamente después, y su movilización masiva y su compromiso con las tácticas de acción no violenta desempeñaron un papel clave en la creación de la CEH e instituciones públicas, como la Oficina de la Defensoría de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación.<sup>10</sup> Los grupos de derechos de indígenas y campesinos también habían combinado la acción no violenta con mecanismos institucionales para exigir la devolución de los territorios robados sobre la base de los principios de responsabilidad y transparencia, utilizando tanto la ley como el sistema judicial junto con litigios contra los propietarios industriales y las industrias extractivas. Varios entrevistados reconocieron el papel destacado que desempeñaron los líderes y movimientos indígenas en la promoción de los derechos humanos y en la creación de las bases para la movilización actual en torno a los objetivos anticorrupción y de TRBG. “El movimiento anticorrupción atrajo la atención en los últimos años, pero no debemos ignorar que hubo movimientos sociales antes de nosotros con una historia más larga y con demandas sociales y políticas”, dijo un joven líder de JusticiaYa.<sup>11</sup> Otro de los entrevistados coincidió y afirmó que las autoridades indígenas de todo el país hoy forman parte de la “primera rama de la posguerra que puso

en su agenda la lucha contra la corrupción y la transparencia. Hubo una reconstrucción del entramado social en el período de posguerra que creó grandes posibilidades para actuar de forma política, social y cultural”.<sup>12</sup>

El período de posguerra se caracterizó por la movilización ciudadana y la organización para alcanzar los objetivos de TRBG. Cuando se restringió el acceso de la CEH a los documentos gubernamentales durante su investigación de los abusos cometidos durante la guerra, la sociedad civil (frustrada por la intransigencia y el silencio del gobierno) comenzó a abogar por una ley que aumentara el acceso a la información en Guatemala. A principios de la década del 2000, más de una docena de OSC unieron fuerzas para presionar a los legisladores a fin de que aprobaran el proyecto de ley. Participaron en diversas iniciativas de control, defensa y presión y, finalmente, tuvieron éxito cuando el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública en 2008. Para varios entrevistados este fue un logro importante.

En 2006, la lucha contra la impunidad y por los objetivos de TRBG culminó en la creación de la CICIG. Unos años antes, los grupos de derechos humanos habían propuesto la creación de una comisión independiente que investigara y demandara a los organismos ilegales que cooptaban el estado y alimentaban la corrupción. Argumentaron que se necesitaba con urgencia una comisión de supervisión externa, porque las empresas criminales organizadas que tenían vínculos con actores políticos y del sector de la seguridad no tenían control y el sistema judicial se había convertido en “sinónimo de impunidad”.<sup>13</sup> Estas redes criminales, conocidas como “Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad” (o CIACS), surgieron de la inteligencia del estado y los servicios militares durante la guerra y continuaron operando con posterioridad. Hoy en día siguen operando. Han contribuido al desarrollo del crimen organizado a gran escala y, gracias a sus vínculos con funcionarios gubernamentales y élites, han ejercido una influencia política significativa y han creado una cultura de la impunidad.<sup>14</sup> Los CIACS han sido responsables de la brutal represión y violencia contra los defensores de los derechos humanos, líderes sindicales, estudiantes activistas, periodistas y líderes políticos.

En 2006, grupos de derechos humanos trabajaron con la sociedad civil, políticos progresistas, el gobierno del entonces presidente Alfonso Portillo y diferentes sectores de la comunidad internacional para darle forma al acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala, que creó la CICIG.<sup>15</sup> La comisión comenzó con sus actividades en 2007 y enfrentó cada vez más al poder establecido y a las redes de corrupción en diversos sectores estatales y no estatales.

## 2015: un nuevo despertar cívico para frenar la corrupción

La corrupción es una característica de muchos gobiernos en todo el mundo, pero los países que hacen la transición de la guerra a la paz son particularmente vulnerables. La detección de prácticas corruptas y el cumplimiento de las leyes anticorrupción son temas particularmente difíciles en los estados que salen de un conflicto y suelen quedar con marcos jurídicos e institucionales débiles o inexistentes. Es probable que el legado de la corrupción en tiempos de guerra resulte en la “conservación de agentes, redes y prácticas de corrupción” que siguen planteando desafíos para la reconstrucción y la democratización mucho tiempo después de la finalización del conflicto.<sup>16</sup> La falta de poder del estado para controlar y supervisar diversos sectores también puede hacer que el estado sea más “propenso a ser capturado por la élite privilegiada con acceso a poder y recursos”.<sup>17</sup> Países que salieron de la guerra civil en la década de 1990 tan diversos desde el punto de vista geográfico como Mozambique, Camboya y Bosnia, todavía





El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (izquierda), estrecha la mano del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, luego del discurso del comisionado en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala el 23 de abril de 2015. (Foto de Moisés Castillo/AP)

se considera que están entre las naciones más corruptas del mundo.<sup>18</sup>

En el contexto guatemalteco de violencia social y política generalizada, la corrupción común y corriente se consideró un problema menos grave y no provocó el mismo nivel de indignación en la población. Los ricos y poderosos rara vez enfrentaron consecuencias por

actos de corrupción.<sup>19</sup> La combinación de instituciones estatales ineficaces con la prevalencia de la impunidad generó un entorno en el que las élites políticas y económicas eludieron la responsabilidad mientras los ciudadanos afrontaban las consecuencias cotidianas.<sup>20</sup> Sin embargo, en 2015 se produjo un cambio significativo, ya que se unieron varios factores para cambiar esta dinámica y sentar las bases de un movimiento TRBG revitalizado, basado en el legado del histórico movimiento de derechos humanos de Guatemala. Diversos actores recientemente movilizados, en particular la juventud urbana, se mostraron dispuestos a participar en la lucha. Un entrevistado describió a estos jóvenes como “niños que nacieron antes de los acuerdos de paz, pero en un momento en el que no se producían bombardeos”; vieron más allá del “silencio de las generaciones anteriores” y quisieron comprender su papel más allá de la guerra. Otros factores importantes incluyeron el nuevo líder de la CICIG, Iván Velásquez, exjefe de la Corte Suprema de Colombia que fue designado jefe de la comisión el 31 de agosto de 2013, y el trabajo de dos fiscales muy eficaces. Una de las fiscales fue Claudia Paz y Paz, una activista de derechos humanos que se desempeñó como fiscal general de Guatemala entre 2010 y 2014. Fue reemplazada por Thelma Aldana, una jurista experimentada y expresidente de la Corte Suprema de Guatemala. La agenda anticorrupción también estuvo entre las principales preocupaciones de muchas organizaciones internacionales en ese momento. Se consideró que la embajada de los Estados Unidos y otras embajadas desempeñaron un papel clave a la hora de presionar a los líderes guatemaltecos para que escucharan las demandas de los ciudadanos y de la CICIG.<sup>21</sup>

El movimiento de 2015 comenzó cuando Aldana, en colaboración con la CICIG, aportó evidencia sobre una red de fraude aduanero generalizado conocido como “La Línea”, que involucraba al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, así como a otros políticos y funcionarios de alto rango de la autoridad fiscal. La detallada evidencia descubierta sobre La Línea puso al descubierto antiguas prácticas corruptas y no dejó lugar a dudas sobre el alcance de este problema en las altas esferas. “Sabíamos que había altos grados de corrupción en el gobierno; lo que no sabíamos era cuán alto habían llegado”, dijo



un activista de Alta Verapaz. Un defensor de los derechos humanos que vive en la Ciudad de Guatemala también reflexionó sobre el impacto de la revelación: “La gente pudo ver lo descarados que eran estos políticos. . . . [Los investigadores] demostraron con evidencia — testimonial y documental— cómo la corrupción afecta a la vida cotidiana”. La investigación a gran escala realizada por la fiscal y la CICIG había incorporado modernas técnicas forenses de investigación y grabaciones de llamadas intervenidas, que mostraban cómo las empresas de la gran red de La Línea pagaban sobornos a cambio de comisiones ilegales, lo cual constituía una estafa de millones de dólares anuales a los contribuyentes.<sup>22</sup> Las pruebas demostraron que Pérez Molina y Baldetti supervisaban las operaciones de la red.

La investigación impulsó a Lucía Mendizábal, una profesional sin experiencia previa en la organización comunitaria, a tomar medidas. Decidió utilizar las redes sociales para organizar una protesta. “No importa si vienen solo cuatro personas. Voy a vivir en paz conmigo misma porque sé que hice algo al respecto”, relató.<sup>23</sup> Su llamado a la movilización con el *hashtag* #RenunciaYa derivó rápidamente en el movimiento RenunciaYa, cuya exigencia principal era que Pérez Molina y Baldetti dimitieran.<sup>24</sup> Todos los sábados de abril hasta agosto de 2015, decenas de miles de ciudadanos participaron en una variedad de tácticas no violentas, que incluyeron desde protestar, entonar canciones, flamear la bandera y vestir los colores nacionales hasta cantar el himno nacional, cerrar carreteras y participar en la resistencia digital. Los eslóganes y los *hashtags* de Twitter incluyeron #YoEstoyPorGuate y #YoNoTengoPresidente.<sup>25</sup> El movimiento organizó una huelga nacional, y muchas universidades y pequeñas empresas apoyaron el paro. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una poderosa asociación empresarial, al principio no apoyó la huelga, con el argumento de que era contraproducente para la economía del país. Sin embargo, algunas empresas afiliadas a la organización pronto rompieron filas y el CACIF anunció que se uniría a la huelga nacional la mañana que estaba previsto que comenzara.<sup>26</sup> Las diversas acciones impulsadas por los ciudadanos finalmente llevaron a Baldetti a presentar su renuncia en mayo, y Pérez Molina dio un paso al costado en septiembre. Ambos líderes fueron encarcelados posteriormente por corrupción.

La mayoría de los entrevistados y participantes de los grupos focales coincidieron en que la erupción social de 2015 marcó un cambio significativo en el panorama de TRBG, y uno dijo que representaba un “despertar ciudadano” para los guatemaltecos. El movimiento atrajo la atención nacional e internacional, impulsó conversaciones públicas en torno a la transparencia y la responsabilidad e inspiró a la gente a movilizarse y exigir un cambio. Esto se basó en el entendimiento de que, como dijo un participante, “todas las políticas públicas mal ejecutadas y la corrupción nos afectarán a todos como ciudadanos. . . . Ya había un interés, y los ciudadanos se despertaron y dijeron: ‘Bueno, ¿cómo podemos ser parte del movimiento?’”. Mientras que los grupos indígenas y los campesinos habían sido pioneros de los movimientos anteriores, RenunciaYa fue motorizado por los jóvenes y la clase media urbana. Un entrevistado describió el trabajo de las generaciones anteriores como “la fertilización de la tierra” para que los nuevos activistas vieran los resultados. Quienes salieron a las calles en 2015 “eran defensores de los derechos humanos, no solo manifestantes anticorrupción. Si mirábamos sus pancartas, decían que la corrupción era la razón por la que no había ni salud ni educación. Eran personas que venían de universidades de élite”. Los guatemaltecos que habían permanecido en silencio durante décadas acerca de la corrupción se convirtieron en protagonistas de la acción no violenta, y sorprendieron a las históricas élites institucionales involucradas en el *statu quo* corrupto.<sup>27</sup>



Líderes indígenas muestran su apoyo al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, enfrentando a una línea policial en la Ciudad de Guatemala el 29 de agosto de 2017. (Foto de Moisés Castillo/AP)

## Obstáculos y reveses desde 2015

Aunque el movimiento RenunciaYa generó conciencia sobre el carácter arraigado y generalizado de la corrupción en Guatemala y derribó a los principales líderes del país, el avance en las reformas desde 2015 ha sido lento y ha estado asediado por obstáculos. Un representante de una ONG con sede en la Ciudad de Guatemala dijo que las manifestaciones masivas en 2015 “hicieron que las redes criminales se retiraran, pero cuando vieron que las protestas habían desaparecido, volvieron a funcionar”. Otro entrevistado observó fallas en el sistema judicial: “Toda la lucha ya está un poco debilitada, y los jueces ya están empezando a dejar que los acusados de corrupción salgan libres”.

¿Qué fue lo que provocó que no se consolidaran las victorias del pico de movilizaciones en 2015? Una razón clave fue que, a pesar de sus notables logros, los segmentos de la sociedad recién activados que constituyeron el movimiento de 2015 no pudieron conectarse estratégicamente con los históricos movimientos indígenas y campesinos. Esto debilitó su potencial para exigir cambios estructurales más amplios a fin de superar las prácticas corruptas y demandar reformas en el sistema judicial y electoral. Tres factores ayudan a explicar esta oportunidad perdida.

En primer lugar, aunque las organizaciones indígenas y campesinas participaron en las protestas, sus demandas históricas (restituir tierras ancestrales y defender los territorios existentes y los derechos indígenas) no se integraron en la plataforma anticorrupción. En segundo lugar, muchos de los jóvenes recientemente movilizados no tenían experiencia previa en la reflexión o el análisis de los determinantes estructurales subyacentes de la desigualdad social y económica en Guatemala. Tampoco colaboraron estrechamente con los activistas de derechos humanos que

iniciaron el movimiento de derechos humanos después de la guerra. Por lo tanto, las demandas anticorrupción de los jóvenes en 2015 se limitaron al pedido de renuncia de los funcionarios acusados y no incluyeron reformas diseñadas para tener un impacto en los sistemas arraigados de corrupción y desigualdad. Según un participante de un grupo focal, el movimiento tenía pocos planes sobre qué hacer después de las renuncias de Pérez Molina y Baldetti: “[La situación] se complicó porque ya no había una agenda, por lo que la gente comenzó a perder interés. . . . Decíamos: ‘Bueno, ¿y ahora qué hacemos?’”. En tercer lugar, las elecciones generales de 2015 estaban programadas para más adelante ese año y muchos manifestantes supusieron que elegir nuevos líderes y legisladores sería suficiente para limpiar las instituciones gubernamentales y estatales.<sup>28</sup> Si bien el movimiento juvenil urbano representaba un rechazo a los partidos políticos tradicionales y al liderazgo social, no contaba con un portavoz ni con un líder o coordinador que pudiera contribuir a contrarrestar la politización de las demandas del movimiento o evitar el riesgo de ser cooptado por la política tradicional.<sup>29</sup>

Las deficiencias del movimiento se hicieron cada vez más evidentes cuando los activistas y las OSC que impulsaban una agenda de TRBG y anticorrupción se enfrentaron a desafíos ya conocidos bajo el mandato del presidente recién electo, Jimmy Morales. Morales había hecho campaña con la promesa de luchar contra la corrupción y había adoptado el lema “Ni corrupto, ni ladrón”, pero se vio sumido en acusaciones de financiamiento ilícito de la campaña. En agosto de 2017, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, anunció que Morales, al parecer, no había informado sobre las contribuciones anónimas a su campaña electoral de 2015. Velásquez intentó despojar al presidente de su inmunidad para ser procesado. Morales respondió con una orden de expulsión de Velásquez de Guatemala, pero la decisión fue invalidada por la Corte de Constitucionalidad. La medida de Morales desató protestas nacionales e internacionales, pero resultó ser solo el inicio de una serie de ataques contra la CICIG.<sup>30</sup>

La cruzada anticorrupción liderada por la fiscal general Thelma Aldana y la CICIG recibió un gran apoyo de toda la sociedad guatemalteca en ese momento. Una encuesta nacional de 2017 indicó que el 71 por ciento de la población confiaba en la CICIG, un nivel de confianza significativamente más alto que el que tenían otras instituciones estatales, incluido el Ministerio Público (el ministerio responsable de hacer cumplir la ley) y la Corte de Constitucionalidad.<sup>31</sup> Sin embargo, a medida que las investigaciones de la CICIG se extendieron más allá de los miembros de la élite política (como el hermano y el hijo del presidente Morales) e incluyeron banqueros, corporaciones privadas y miembros de familias poderosas dentro de la élite económica, el apoyo a la comisión comenzó a erosionarse.<sup>32</sup> La clase media, que inicialmente había apoyado la agenda anticorrupción del movimiento, comenzó a retirar su apoyo, al menos públicamente, cuando se dio cuenta de que los propietarios de las corporaciones privadas para las que trabajaban estaban siendo acusados.<sup>33</sup> El CACIF, la asociación empresarial, comenzó a intentar hacer retroceder a la CICIG después de que varias de sus afiliadas fueran blanco de investigaciones de corrupción por cifras multimillonarias.<sup>34</sup> Poderosas figuras industriales y financieras, como exportadores de azúcar y banqueros privados, lanzaron una campaña en la que acusaron a la CICIG y a la fiscal de esconder una agenda política de izquierda.<sup>35</sup> Funcionarios del gobierno, políticos y empresarios guatemaltecos formaron parte de un plan para contratar una empresa con sede en Washington D.C. que ejerciera presión para persuadir a los legisladores y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de sospechar del trabajo de la CICIG y del embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, quien había sido un defensor de los esfuerzos anticorrupción.<sup>36</sup>

En mayo de 2018, Aldana y la CICIG presentaron denuncias adicionales contra Morales tras determinar que el presidente había participado en la financiación ilegal del partido político que lo llevó al poder.<sup>37</sup> Poco después, Morales anunció que no renovarían el mandato de la CICIG, que



Hoy en día, los críticos consideran que la movilización anticorrupción no es una cuestión apolítica inherente a la buena gobernanza, sino una actividad política de izquierda que forma parte de una agenda de interferencia internacional en la política interna.

vencía en septiembre de 2019. El presidente fue cada vez más diligente para neutralizar a la comisión, con el objetivo de debilitar la agenda anticorrupción más amplia. En esta tarea lo acompañaron funcionarios gubernamentales y miembros poderosos de la élite económica, muchos de los cuales tenían socios comerciales o familiares acusados en casos de corrupción. La campaña contra la CICIG sumió al país en una crisis constitucional, en la que los poderes ejecutivo y legislativo del estado desobedecían

abiertamente las órdenes de la Corte de Constitucionalidad.<sup>38</sup> Algunos analistas argumentaron que el presidente y sus aliados tenían como objetivo un golpe de estado en cámara lenta.<sup>39</sup> El gobierno de Morales también se opuso a las Naciones Unidas y a los países que expresaron su apoyo a la CICIG y su agenda anticorrupción, lo que incidió negativamente en el apoyo internacional a los actores del movimiento TRBG en Guatemala. Según un activista que trabajó con actores internacionales y que fue entrevistado a principios de 2019 para este estudio: “Varios [donantes internacionales] nos han dicho que las autoridades gubernamentales actuales los presionan para no involucrarse y no apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que marcan los temas anticorrupción”.

Además de provocar una respuesta negativa por parte de las élites políticas y económicas, el movimiento TRBG ha revivido patrones de polarización ideológica que se vieron en Guatemala inmediatamente después de la guerra civil. Hoy en día, los críticos consideran que la movilización anticorrupción no es una cuestión apolítica inherente a la buena gobernanza, sino una actividad política de izquierda que forma parte de una agenda de interferencia internacional en la política interna. Las OSC registradas recientemente han contribuido a impulsar este proceso de politización, con la implementación de acciones contrarias a la agenda anticorrupción, antiimpunidad y de buena gobernanza.<sup>40</sup> Por ejemplo, un grupo llamado #GuatemalaInmortal ha utilizado las redes sociales para protestar contra la CICIG y manifestarse contra las reformas constitucionales propuestas destinadas a fortalecer el sistema judicial.<sup>41</sup> Un entrevistado afirmó que el discurso polarizador en los medios ha buscado restar visibilidad pública a los ciudadanos que trabajan para abordar temas de transparencia y responsabilidad. Un participante de un grupo focal describió cómo el aumento de la polarización impactó en la capacidad de su organización para colaborar con otros y dijo que “para nosotros ha sido terrible porque no tenemos una bandera ideológica. Trabajamos con muchas personas, pero algunas tienen una mentalidad cerrada. [Es] como si no estuviéramos en el mismo barco, no podemos trabajar juntos; eso ha sido muy perjudicial”.

La creciente polarización contrasta con lo que se observó en 2015, cuando diversos sectores de la sociedad —juventud urbana, miembros de la clase media, grupos indígenas, campesinos y asociaciones empresariales— se unieron (aunque temporalmente) para exigir que se responsabilizara a los líderes por abusar de su autoridad a expensas de los ciudadanos. También es importante señalar que, si bien las redes sociales y la tecnología digital fueron fundamentales para movilizar a la gente durante las protestas masivas de 2015, estas mismas herramientas ahora se utilizan en gran medida para infundir miedo y difundir desinformación. Se han utilizado como parte de campañas de desprestigio contra jueces, líderes de la sociedad civil, periodistas, fiscales estatales y la CICIG.<sup>42</sup>

Otro contratiempo significativo para el movimiento TRBG de Guatemala ha sido la salida de la CICIG, aunque deja un legado inspirador para futuras iniciativas contra la corrupción y la impunidad en el país. Encabezada por una persona designada por el secretario general de la

ONU con financiamiento de los Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, la comisión trabajó codo a codo con la fiscalía en investigaciones para ayudar a impulsar la legitimidad y la capacidad de las instituciones estatales de Guatemala. El modelo de la CICIG se ha utilizado como ejemplo para otros gobiernos plagados de corrupción en América Latina.<sup>43</sup> Durante sus doce años en Guatemala, la CICIG colaboró en la presentación de más de 120 casos en el sistema judicial estatal, lo que se tradujo en cargos contra 1,540 personas y más de 400 condenas.<sup>44</sup> Hasta julio de 2019, unas 660 personas enfrentaban cargos. La comisión ayudó a identificar más de 70 estructuras criminales de alta complejidad y a procesar más de 120 casos de alto impacto, que involucran a “sujetos con gran potencial de daño social”.<sup>45</sup> Además de sus casos más notables contra el presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti, la CICIG colaboró con el procesamiento de decenas de otros altos funcionarios del gobierno, entre ellos un magistrado de la Corte Suprema, otros dos expresidentes, congresistas y ministros del gobierno. La comisión también apoyó la destitución de más de una decena de jueces y miles de policías, así como la detención de narcotraficantes.<sup>46</sup> Aunque es más conocida por sus casos de alto impacto, la CICIG también fue fundamental para promover reformas en el sistema judicial de Guatemala, mediante la ayuda para la creación de tribunales especiales con el fin de proteger mejor a los jueces del crimen organizado, unidades separadas para investigaciones especiales y análisis criminal, y un programa de protección de testigos. Según un informe de International Crisis Group (Grupo Internacional de Crisis), la CICIG también tuvo un papel importante en la disminución de la tasa de homicidios en Guatemala, que cayó alrededor de un 19 por ciento entre 2009 y 2017, y la tasa de impunidad del país por delitos violentos, que cayó del 98 por ciento en 2008 al 87 por ciento en 2016.<sup>47</sup>

Varios entrevistados y participantes de los coloquios de los grupos focales destacaron lo importante que fueron las contribuciones de la CICIG para su trabajo de anticorrupción y reflexionaron sobre el legado de la comisión. Un participante de un grupo focal dijo que la CICIG, a través de sus investigaciones y la manera en que expuso y presentó la corrupción de maneras nunca antes vistas en Guatemala, contribuyó a un importante cambio cultural dentro de la sociedad civil: “Existen colectivos que antes no existían. Existen esfuerzos que antes no existían. Y hay asuntos que persisten y persistirán a través de los colectivos”. Sin embargo, la salida de la CICIG ha disminuido el optimismo con respecto a la mitigación y la prevención de la corrupción y ha llevado a algunos a la desesperación, especialmente a los actores del movimiento social que operan en el campo: “A pesar de que la CICIG no tuvo presencia en Alta Verapaz, y a pesar de que no tuvimos ningún tipo de apoyo de la CICIG, vimos que tenían un buen respaldo y notamos que los funcionarios públicos les tenían un poco de miedo. Pero desde la salida de la CICIG, creo que hoy la ‘mafia’ es aún más fuerte”. Otro activista que trabaja en Quetzaltenango, dijo: “No soy optimista sobre el futuro sin la CICIG. Creo que la CICIG . . . debe ser reconsiderada y su retorno debe producirse por la presión externa. . . . Quedan muchas cosas por hacer para acabar con la impunidad”.

Quedó claro que muchos entrevistados atribuyeron el éxito de la CICIG al hecho de ser una institución con respaldo internacional y algunos cuestionaron cómo el progreso en la lucha contra la corrupción podría continuar sin una presencia externa. Otros, sin embargo, se centraron en cómo trazarán el camino a seguir. “Creo que estamos en una época en la que buscamos mecanismos más eficaces a través de las sociedades civiles y organizaciones especializadas para una mejor supervisión y auditoría”, dijo un entrevistado. “Son tan eficaces como una protesta. . . Tal vez [necesitamos] mecanismos más sofisticados con herramientas más claras y alianzas internacionales estratégicas para continuar con la operación que la CICIG puso sobre la mesa”.

# El movimiento anticorrupción hoy

A pesar de enfrentar la contraofensiva de las élites políticas y económicas, lidiar con una mayor polarización y adaptarse a la ausencia de la CICIG, muchos activistas, organizaciones y movimientos continúan impulsando la agenda de TRBG en varios frentes. Algunos de los grupos que surgieron de la movilización de 2015 no solo siguen activos, sino que también se expanden y persiguen metas estratégicas. Por ejemplo, JusticiaYa, que fue formado por los organizadores de RenunciaYa, ha evolucionado hasta convertirse en un colectivo involucrado en el activismo, la movilización y la educación política en la capital y otras áreas urbanas.<sup>48</sup> JusticiaYa está formado principalmente por jóvenes y estudiantes de la Ciudad de Guatemala que se organizan para la transformación política del país. “Creo que no todo lo que surgió de la movilización de 2015 está perdido”, dijo un dirigente de JusticiaYa. “Ahora hay una asociación de profesionales que eran estudiantes en 2015. Este grupo está promoviendo el fortalecimiento de las instituciones y los servicios públicos y ven que, como profesionales jóvenes, esa sería su principal contribución”.

En 2017, JusticiaYa lideró una segunda ola de movilizaciones masivas en todo Guatemala. Los hechos ocurrieron mientras las investigaciones de la CICIG relacionadas con el financiamiento de la campaña apuntaron al presidente Morales, sus familiares y socios políticos. Cuando Morales declaró a Velásquez, el comisionado de la CICIG, persona no grata en agosto de 2017, los ciudadanos se manifestaron en apoyo al comisionado y JusticiaYa presentó una medida de protección para él ante la Corte de Constitucionalidad.<sup>49</sup> Los ciudadanos salieron a la calle en protestas similares a las de 2015 después de que la Asamblea Nacional aprobara en septiembre de 2017 un decreto que minimizaba las penas por financiamiento electoral ilegal y reducía las sentencias a prisión para los condenados por el delito.<sup>50</sup> La medida fue vista como una protección para que Morales y otras élites políticas no fueran procesados y como un abuso de poder flagrante. JusticiaYa y otros grupos convocaron protestas nacionales y se calcula que respondieron unas 205,000 personas. La marcha principal tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala pero también se reportaron protestas masivas en Quetzaltenango, Alta Verapaz, Huehuetenango, Ixcán y otras áreas del interior.<sup>51</sup> Los manifestantes fueron diversos e incluyeron sindicalistas, miembros de federaciones campesinas indígenas, estudiantes, miembros de la clase media urbana y algunas empresas. La Alianza por las Reformas, un grupo que incluye decenas de OSC y que se formó en 2016 para promover reformas constitucionales en Guatemala, presentó una petición ante la Corte Suprema de Justicia para quitarles la inmunidad a los legisladores que aprobaron la controvertida ley, alegando que sus acciones constituían una obstrucción a la justicia.<sup>52</sup>

La acción masiva a nivel nacional impulsó al Congreso a anular la ley, y varios legisladores que habían votado a favor pidieron disculpas públicas a sus electores.<sup>53</sup> JusticiaYa, La Alianza y otros grupos presentaron una serie de demandas: las renuncias de Morales y otros miembros del Congreso, reformas electorales para acabar con la impunidad, la continuidad del trabajo de la CICIG sin obstáculos y la creación de una asamblea nacional constituyente para redactar una nueva constitución.<sup>54</sup> Las expresiones de indignación pública de varios sectores de la sociedad, combinadas con una serie de demandas ciudadanas que pedían cambios fundamentales en el sistema político, parecieron tener un impacto. Provocaron la renuncia de los ministros de finanzas, trabajo, gobernación e interior y, en ese momento, la CICIG estuvo a salvo temporalmente. La energía renovada en respuesta a los abusos de poder había demostrado la existencia de nuevas organizaciones y movimientos comprometidos con la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad.



La cantidad de activistas y organizaciones que trabajan para fortalecer el movimiento TRBG y promover su agenda probablemente sería mayor si hubiera más optimismo en el área.

Un líder de JusticiaYa describió cómo el movimiento TRBG había aprendido de sus deficiencias en 2015 y reflexionó acerca de cómo el trabajo del grupo se había inspirado en los históricos movimientos indígenas y campesinos. “Cuando nos dimos cuenta de que la corrupción y la impunidad son el resultado de procesos históricos, empezamos a entender las demandas de

los movimientos campesinos, indígenas y de mujeres. Ahora entendemos que nuestra organización debe formar parte de una demanda social más amplia para transformar el estado guatemalteco”. De manera similar, un entrevistado de la comunidad indígena que trabaja con un grupo de derechos humanos para promover la transparencia en la gestión pública dijo que cree que ha habido avances en el movimiento para alcanzar los objetivos de TRBG porque, tras el año decisivo de 2015, “la gente se ha dado cuenta de que el problema es mayor de lo que esperaba, pero sigue exigiendo detener la corrupción”.

La Alianza por las Reformas ha continuado su trabajo a nivel nacional mediante la promoción de reformas dentro del sector judicial, la exigencia de transparencia a los legisladores en los debates sobre la reforma constitucional y el trabajo para responsabilizar a los legisladores por presuntos abusos contra la constitución. La Alianza supervisó las elecciones de 2019 y la designación de nuevos jueces y funcionarios en el sistema judicial. Ha recurrido a los tribunales para impugnar la elección y la designación de los principales jueces de Guatemala, un proceso que históricamente se ha visto influenciado por el crimen organizado, para garantizar una competencia justa. La alianza de unas cuarenta organizaciones también ha buscado diversificar su membresía para incluir tanto a históricos defensores de los derechos humanos como a una generación más joven de activistas.

Fuera de la Ciudad de Guatemala, los actores de la sociedad civil se centran en temas de transparencia y responsabilidad en el ámbito local. Otra coalición que surgió después de las protestas de 2015 es Pacto Ciudadano, que trabaja en asuntos de anticorrupción dentro de los servicios públicos. La coalición incluye varias organizaciones indígenas y campesinas. Otros actores importantes en el espacio de TRBG que trabajan a nivel departamental incluyen las comisiones locales de Guatemala sobre transparencia y probidad. Estas comisiones se centran sobre todo en auditorías sociales y trabajan directamente con funcionarios del gobierno local para abordar temas de transparencia y responsabilidad. También tienen acuerdos interinstitucionales con organismos públicos, como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Un entrevistado señaló que el trabajo es “puramente voluntario” y que algunas comisiones departamentales son más activas que otras.

La cantidad de activistas y organizaciones que trabajan para fortalecer el movimiento TRBG y promover su agenda probablemente sería mayor si hubiera más optimismo en el área. Incluso entre quienes están activos, es evidente que hay una sensación de pesimismo. Ante los diversos acontecimientos que llevaron a la salida de la CICIG y la elección del presidente Alejandro Giammattei, muchos entrevistados, hacia la segunda mitad de 2019, sintieron que estaban presenciando una regresión política hacia un régimen más represivo e intolerante y alejado de los ideales de transparencia, responsabilidad y gobernanza democrática.

Como sucesor de Morales, Giammattei asumió el cargo en enero de 2020. Antes de convertirse en presidente, Giammattei expresó su falta de apoyo a la CICIG, pero sí se comprometió a combatir la corrupción en Guatemala. Poco después de asumir el cargo, Giammattei creó su propia Comisión Presidencial contra la Corrupción, cuya membresía, a diferencia de la de la CICIG, se limita a funcionarios del gobierno estatal. El trabajo de la comisión resultó en el

despido de dos viceministros de salud en abril de 2020 tras las investigaciones sobre una supuesta red de corrupción dentro del ministerio.<sup>55</sup> Aunque esta es una señal de progreso, muchos ciudadanos aún no están convencidos de que la comisión presidencial sea totalmente independiente y están a la espera de que investigue las denuncias en otros ministerios. Además, hay sectores de la sociedad civil que están preocupados por la reciente ley que amenaza con socavar la independencia de las ONG y la libertad de asociación en Guatemala y que se asemeja a las leyes implementadas en los últimos años en Rusia, Nicaragua y Venezuela.<sup>56</sup> El Congreso de Guatemala aprobó en febrero de 2020 el polémico proyecto de ley que le permitiría al Ministerio del Interior dar de baja una ONG si considera que la organización ha violado el orden público y le daría al gobierno el control sobre los fondos proporcionados por donantes internacionales a las ONG. Los críticos afirman que está dirigido a las OSC que trabajan para promover una mayor responsabilidad por parte del gobierno y defender los derechos de los ciudadanos.<sup>57</sup> Dados los preocupantes cambios en el panorama de TRBG, la sociedad civil de Guatemala podría beneficiarse de la ayuda de actores internacionales en la creación de oportunidades para lograr iniciativas exitosas contra la corrupción.

## Recomendaciones para los actores externos

Casi todos los entrevistados y participantes de grupos focales de este estudio son miembros de organizaciones que reciben algún tipo de apoyo externo, principalmente en forma de asistencia financiera o capacitación. Gran parte de ese apoyo proviene de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Unión Europea y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con ONG internacionales y fundaciones privadas, como Open Society Foundations, que también brindan asistencia. Los entrevistados identificaron una amplia variedad de ámbitos en los que los actores internacionales han ayudado a impulsar la agenda de TRBG: financiación para investigaciones y eventos públicos, ayuda en el diseño de planes estratégicos, prestación de asistencia jurídica, apoyo institucional a organizaciones para pagar al personal, ayuda en la elaboración de propuestas para reformas jurídicas y procedimentales y ayuda para conseguir apoyo público para la agenda de TRBG y la mejora de la imagen pública de las OSC.

Varios entrevistados también mencionaron el apoyo internacional a las asociaciones de la sociedad civil con instituciones estatales como apoyo crítico a la labor de TRBG. “Diría que el ‘impacto directo’ en las instituciones y los funcionarios es la clave”, dijo un representante de una OSC de transparencia y lucha contra la corrupción. “No podemos esperar ningún cambio si no contamos con el compromiso del gobierno o incluso de instituciones privadas. . . . Esta es una de las tácticas que se debe utilizar porque facilita el diálogo entre las personas y dentro las instituciones gubernamentales”. Sin embargo, muchos activistas y varios OSC cuestionan el compromiso de los funcionarios con los esfuerzos anticorrupción y, por lo tanto, consideran que las asociaciones con el gobierno son inútiles. Varias OSC guatemaltecas reciben financiamiento internacional para participar en la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés), una iniciativa que reúne a representantes de la sociedad civil y del gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción. Pero Acción Ciudadana, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y otras OSC importantes se retiraron de las discusiones de la OGP en junio de 2018, declarando públicamente que el

Los representantes de las OSC lamentaron que los donantes suelen solicitar propuestas para proyectos de uno o dos años, lo que refleja una comprensión simplista del cambio social y una expectativa poco realista.

gobierno no se tomaba en serio sus compromisos con la OGP y que estaba utilizando la iniciativa meramente como un ejercicio de relaciones públicas.<sup>58</sup> Otras OSC optaron por seguir participando en la iniciativa para “mantener un espacio donde pudieran expresar su descontento con las decisiones del gobierno”.<sup>59</sup>

El apoyo externo a las instituciones públicas de Guatemala y, en particular, a la CICIG, ha ayudado a crear un entorno favorable para las OSC y otros actores del movimiento TRBG. La CICIG ayudó a lograr que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea una prioridad en la agenda política y en los medios de comunicación, lo cual abre un espacio para la democratización y la participación cívica. Sin embargo, es importante señalar que la gente comenzó a cuestionar el apoyo estadounidense a la CICIG en los años previos a su cierre. Estados Unidos fue uno de los principales patrocinadores financieros de la CICIG y el embajador Todd Robinson había brindado apoyo diplomático clave durante el apogeo del movimiento de 2015. No obstante, luego de una serie de reuniones con la empresa contratada para presionar y desacreditar a la CICIG, los legisladores estadounidenses comenzaron a pronunciarse en contra de la comisión y, en mayo de 2018, el senador Marco Rubio suspendió la financiación estadounidense a la CICIG basándose en acusaciones aparentemente infundadas de influencia rusa dentro de la comisión.<sup>60</sup> Posteriormente se restituyeron las contribuciones financieras estadounidenses, pero el gobierno del presidente Donald Trump fue criticado por no condenar abiertamente la decisión de Morales de cerrar la CICIG.<sup>61</sup>

Muchos entrevistados y participantes de los coloquios de los grupos focales también mencionaron los desafíos que los actores del movimiento social interno suelen enfrentar al trabajar con actores internacionales, desafíos que han sido documentados por activistas de TRBG y representantes de OSC en lugares tan variados como Kenia, Ucrania y Nigeria.<sup>62</sup> En primer lugar, los representantes de las OSC lamentaron que los donantes suelen exigir propuestas para proyectos de uno o dos años, lo que refleja una comprensión simplista del cambio social y una expectativa poco realista de que los beneficiarios podrán documentar un cambio conductual tanto en los ciudadanos como en las autoridades en plazos tan cortos. En segundo lugar, los entrevistados mencionaron que el apoyo de los donantes ha fomentado la división entre algunos actores de TRBG, ya que compiten por proyectos con un muy buen nivel de financiamiento y las diversas oportunidades de educación, formación y viajes que pueden derivarse del compromiso de los donantes internacionales. “Entramos en una red en la que nos disputamos los recursos y vemos a los demás como competidores y no como colaboradores o posibles socios para lograr objetivos comunes”, explicó un entrevistado. Esta competencia puede socavar los esfuerzos por construir el tipo de relaciones colaborativas sólidas que pueden impulsar cambios sociales, políticos y económicos importantes. Un tercer desafío mencionado por activistas guatemaltecos y representantes de OSC tiene que ver con los requisitos administrativos que algunos donantes imponen a los beneficiarios. Estos requisitos, que a menudo incluyen tener un sistema financiero y contable acorde con las normas internacionales, pueden excluir del apoyo internacional a los grupos populares informales o no registrados. Una cuarta preocupación expresada por los entrevistados fue la percepción de una disminución en la asistencia extranjera (y especialmente estadounidense y europea) a los actores de TRBG en Guatemala durante los últimos años, como lo indican la significativa reducción o la completa eliminación de las contribuciones financieras por parte de los donantes bilaterales. El ambiente cambió mucho con respecto a unos años atrás, cuando “parecía que [los donantes] estaban compitiendo entre sí para financiar el movimiento anticorrupción”, dijo



un miembro de JusticiaYa. Un entrevistado clave señaló que algunas OSC guatemaltecas “han vinculado mucho su supervivencia y su impacto con la fluidez de la cooperación internacional”, por lo que cuando desaparece el apoyo externo, se desencadena una “reducción significativa del impacto de las organizaciones”.

Entonces, ¿qué pueden hacer los actores internacionales para brindar un mayor apoyo a la sociedad civil de Guatemala aún activa en esta coyuntura crucial mientras lucha contra la corrupción y por la promoción de la gobernanza democrática? Los entrevistados expresaron un deseo de apoyo flexible. Específicamente, pidieron menos apoyo a proyectos y más apoyo básico general para que las OSC desarrollen su capacidad institucional a fin de responder a los cambios en el entorno operativo en tiempo real. Los entrevistados también expresaron el deseo de un apoyo basado en una visión de cambio social a mediano y largo plazo que refleje una comprensión más realista de los procesos de reforma social y política.

La disminución del apoyo de los actores internacionales en los últimos años ha tenido un impacto negativo en la sostenibilidad de las organizaciones del movimiento. Los actores del movimiento han dependido demasiado de los fondos externos y esta dependencia los ha hecho vulnerables a los cambios en las prioridades de los donantes y a las medidas estrictas contra las organizaciones financiadas con fondos extranjeros, que muchos activistas prevén en virtud de la ley de ONG propuesta por el gobierno de Giammattei. Al brindar apoyo financiero, los donantes externos podrían utilizar modelos que sean menos propensos a generar dependencia y que ayuden a las OSC a desarrollar estrategias de supervivencia para afrontar el cese del apoyo extranjero. Aunque los entrevistados no estaban seguros de cómo sería un modelo como este en la práctica, no dudaban de que sería valioso. Los donantes también pueden ayudar siendo claros acerca de cuándo comenzará y terminará el apoyo para no “fomentar un paternalismo y una dependencia poco saludables” y colaborando con las OSC en la identificación de otras posibles fuentes de apoyo.<sup>63</sup> En general, los activistas y los representantes de las OSC entrevistados para este informe se mostraron críticos respecto de la ayuda brindada por actores externos con objetivos y metas predefinidos y determinados externamente.

Cuatro comentarios de entrevistas separadas ayudan a arrojar luz sobre las diferentes necesidades de los actores del movimiento en Guatemala y las formas específicas en que los actores externos pueden respaldar mejor sus esfuerzos para promover la transparencia y la responsabilidad:

Sabemos que, además de nuestras manifestaciones en la calle, debemos trabajar con el sistema judicial para llevar los casos a los tribunales. Ahora lo estamos haciendo, pero creemos que nuestros argumentos jurídicos no son tan buenos como podrían ser. Por ejemplo, nos gustaría saber más sobre los tratados internacionales que abordan la lucha contra la corrupción que podríamos utilizar en nuestros argumentos legales ante un tribunal. Creo que necesitamos formación y apoyo en esta área.

Necesitamos apoyo para fortalecer nuestra comunicación, tanto dentro de nuestro movimiento como con la audiencia externa. Considero que no tenemos esas habilidades y a menudo terminamos utilizando mensajes que no son claros o repitiendo la forma en que se comunican los medios corporativos, que es muy mala e incompleta. Necesitamos usar métodos de comunicación alternativos que también promuevan el pensamiento crítico.

El obstáculo más importante para expandir el trabajo del movimiento social es la gran centralización de todas las actividades en la Ciudad de Guatemala. Las organizaciones que ofrecen capacitación e incluso financiación están todas en la capital y quieren tener todas

las actividades ahí. Hemos conocido pequeñas organizaciones de otras partes del país que necesitan apoyo, pero no pueden viajar a la ciudad para asistir a talleres y otros eventos. Me parece que debe haber una descentralización de todas las actividades para apoyar a las numerosas organizaciones pequeñas fuera de la Ciudad de Guatemala.

Creo que cada vez más donantes deberían poder financiar asociaciones cuyos miembros no estén legalmente registrados y donde la responsabilidad legal sobre la ejecución recaiga en una organización que también sea miembro de esta asociación. Y que una parte de los recursos se pueda utilizar para el activismo, otra parte para el apoyo técnico de dicho activismo y otra parte para el litigio o cualquier otra situación que se derive de dicho activismo. . . [como la necesidad de] protección y seguridad. Para mí, este es el modelo ideal.



La larga historia del activismo en Guatemala en torno a los derechos humanos y la responsabilidad alcanzó su punto máximo con la aparición del gran movimiento anticorrupción de 2015. Este movimiento logró forzar la renuncia de varios líderes políticos corruptos a través de métodos de acción no violenta. Sin embargo, estos cambios fueron en su mayoría superficiales y no abordaron las causas subyacentes y sistémicas de la corrupción y la impunidad. Adicionalmente, el nuevo movimiento urbano no logró conectarse con los movimientos preexistentes con raíces organizativas más profundas, especialmente el movimiento indígena. Este fracaso en la consolidación de las victorias de la actividad de 2015 quedó simbolizado y enfatizado por la expulsión final de la CICIG, un duro golpe para el movimiento TRBG y para Guatemala.

Sin embargo, si bien la salida de la CICIG es un claro contratiempo, aún existen motivos importantes para ser optimistas. El movimiento social de 2015 facilitó el surgimiento de un nuevo y rico espacio de la sociedad civil centrado en los temas de interés de TRBG. Muchas de estas organizaciones siguen activas hoy en día. Tienen el potencial de seguir impulsando cambios estructurales amplios en el sistema legal, electoral y judicial, y están trabajando con reformistas del gobierno para erradicar la corrupción que se infiltra en muchas de las instituciones estatales de Guatemala. A nivel local, las comisiones de transparencia y probidad están llevando a cabo auditorías sociales y trabajan con funcionarios del gobierno para abordar problemas de corrupción en diferentes municipios. La polarización ideológica es una amenaza para las operaciones de muchas OSC en Guatemala y el movimiento TRBG en general, pero hay jóvenes activistas y organizaciones populares como JusticiaYa y la Alianza por las Reformas que rechazan estas divisiones y se niegan a permitir que entorpezcan su trabajo.

Estas organizaciones podrían beneficiarse de diversos tipos de apoyo financiero, técnico y educativo por parte de actores internacionales, especialmente el apoyo para ayudar a los actores del movimiento a abordar mejor las causas subyacentes de la corrupción y los sistemas que la perpetúan. Tal y como lo expresaron los entrevistados, ese apoyo debería ser *flexible*, para que los movimientos puedan adaptarse y responder mejor a la dinámica cambiante en el lugar; *a largo plazo*, para garantizar la sostenibilidad del trabajo del movimiento y permitirle planificar de cara al futuro; y *receptivo* respecto a las necesidades de los actores del movimiento. Este tipo de asistencia ayudaría a sentar las bases de asociaciones locales-internacionales productivas con eje en el conocimiento contextual profundo, el respeto de las necesidades locales y el compromiso con la sostenibilidad. En última instancia, estas asociaciones podrían consolidar los esfuerzos para erradicar la corrupción e incorporar reformas que sean eficaces y duraderas.

# Notas

Los autores desean expresar su reconocimiento a la investigación de campo realizada por Carlos Mendoza, Evelyn Espinoza y Christian Espinoza de Diálogos.

1. Ver Transparency International (Transparencia Internacional), “Corruption Perceptions Index (2019)”, [www.transparency.org/en/cpi/2019/results/table](http://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/table).
2. Simona Violetta Yagenova y Erick García, *Los movimientos sociales y el poder: concepciones, luchas y construcción de contrahegemonía* (Ciudad de Guatemala: FLACSO-Sede Académica Guatemala, 2010), 35.
3. Deborah Levenson Estrada, *Sindicalistas contra el terror: Ciudad de Guatemala, 1954–1985* (Ciudad de Guatemala: AVANCSO, 2007); y Quimy de León y Santiago Bastos, “Guatemala: Construyendo el desarrollo propio en un neoliberalismo de posguerra”, *Pueblos y Fronteras Digital* 10, n.º. 19 (2015): 52–79.
4. Comisión para el Esclarecimiento Histórico, “Guatemala, Memory of Silence (Tz’inil na’tab’al): Report of the Commission for Historical Clarification (Conclusions and Recommendations)”, 1999, [www.hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf](http://www.hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf).
5. Walter Flores, Ana Lorena Ruano y Denise Phé Funchal, “Social Participation within a Context of Political Violence: Implications for the Promotion and Exercise of the Right to Health in Guatemala”, *Health and Human Rights* 11, n.º. 1 (2009): 39.
6. Jeremy Armon, *Negotiating Rights: The Guatemalan Peace Process* (London: Conciliation Resources, 1997), 18.
7. Armon, *Negotiating Rights*, 26.
8. Armon, *Negotiating Rights*, 26.
9. Entrevista del 22 de mayo de 2019 en la Ciudad de Guatemala. Se mantiene la confidencialidad de los nombres de los entrevistados en este estudio.
10. La acción no violenta es un método para promover el cambio social, político o económico a través del uso de tácticas de protesta y persuasión, no cooperación e intervención. Incluye una variedad de tácticas extrainstitucionales, como protestas, boicots, sentadas y vigiliadas.
11. Entrevista en la Ciudad de Guatemala con miembros de JusticiaYa, 7 de diciembre de 2018.
12. Entrevista en la Ciudad de Guatemala, 18 de octubre de 2019.
13. Open Justice Society Initiative, “Unfinished Business: Guatemala’s International Commission against Impunity (CICIG)”, marzo de 2015, [www.justiceinitiative.org/uploads/93bbf6d7-9921-4e04-99ea-25813eb51c3c/cicig-report-english-20150319.pdf](http://www.justiceinitiative.org/uploads/93bbf6d7-9921-4e04-99ea-25813eb51c3c/cicig-report-english-20150319.pdf).
14. InSight Crime, “CIACS”, 9 de marzo de 2017, <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-guatemala/ciacs/>.
15. Steven Dudley, “Élites y crimen organizado en Guatemala”, InSight Crime, 1 de septiembre de 2016, <https://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-en-guatemala-la-cicig>.
16. Dudley, “Élites y crimen organizado en Guatemala”.
17. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Fighting Corruption in Post-Conflict and Recovery Situations: Learning from the Past* (Nueva York: PNUD, junio de 2010), viii.
18. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International (Transparencia Internacional) de 2019, Bosnia ocupa el puesto 101, Mozambique el 146 (igual que Guatemala) y Camboya el 162.
19. Asier Andres, “Guatemala y los límites de la lucha contra la corrupción”, *Pueblos Revista de Información y Debate*, 26 de abril de 2016, [www.revistapueblos.org/blog/2016/04/26/g-u-a-t-e-m-a-l-a-y-los-limites-de-la-lucha-contra-la-corrupcion](http://www.revistapueblos.org/blog/2016/04/26/g-u-a-t-e-m-a-l-a-y-los-limites-de-la-lucha-contra-la-corrupcion).
20. En una oportunidad, la CICIG expuso una red de corrupción en la que, entre 2012 y 2014, funcionarios del Ministerio de Salud malversaron millones de dólares en fondos públicos destinados a ayudar a Guatemala a reconstruir hospitales tras un terremoto mortal. Ver “UN Exposes Massive Corruption Ring in Guatemala Health Ministry”, *TeleSUR*, 17 de julio de 2019, [www.telesurenglish.net/news/UN-Massive-Corruption-Guatemala-Health-Ministry-20190717-0024.html](http://www.telesurenglish.net/news/UN-Massive-Corruption-Guatemala-Health-Ministry-20190717-0024.html).
21. Ver “To Curb Corruption and Violence, Engage the Grass Roots”, un evento sobre el movimiento ciudadano guatemalteco #JusticiaYa, organizado por el United States Institute of Peace, 23 de octubre de 2017, video, [www.usip.org/events/curb-corruption-and-violence-engage-grass-roots](http://www.usip.org/events/curb-corruption-and-violence-engage-grass-roots). Este evento incluyó una discusión entre activistas y profesionales y expertos en el construcción de paz para ayudar a los legisladores y donantes a respaldar mejor las iniciativas cívicas locales con el fin de frenar la corrupción y mejorar la gobernanza y la justicia.
22. Arron Daugherty, “Guatemala’s Big Corruption Scandal, Explained”. 27 de marzo de 2017, [www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-la-linea-customs-scandal-explained](http://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-la-linea-customs-scandal-explained).

23. Shaazka Beyerle y Miranda Rivers, "To Curb Corruption and Violence, the 'Sandwich' Effect", United States Institute of Peace, 16 de noviembre de 2017, [www.usip.org/blog/2017/11/curb-corruption-and-violence-sandwich-effect](http://www.usip.org/blog/2017/11/curb-corruption-and-violence-sandwich-effect).
24. BBC News, "Guatemala's Accidental Revolutionary", video, 23 de agosto de 2018, [www.bbc.co.uk/sounds/play/w3cswl5d](http://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3cswl5d).
25. Ver Global Nonviolent Action Database, "Guatemalans Force Corrupt President and VP to Resign", <https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/guatemalans-force-corrupt-president-and-vp-resign-2015>.
26. *Prensa Libre*, "Sectores se unen para exigir renuncia de Otto Pérez", 28 de agosto de 2015, [www.prensalibre.com/guatemala/politica/sectores-se-unen-para-exigir-renuncia-de-otto-perez](http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/sectores-se-unen-para-exigir-renuncia-de-otto-perez).
27. David Luhnow, "Guatemala Outsources a Corruption Crackdown", *Wall Street Journal*, 11 de septiembre de 2015, [www.wsj.com/articles/guatemala-outsources-a-corruption-crackdown-1442001944](http://www.wsj.com/articles/guatemala-outsources-a-corruption-crackdown-1442001944).
28. Walter Flores, "Youth-Led Anti-Corruption Movement in Post-Conflict Guatemala: 'Weaving the Future'?", *IDS Bulletin* 50, n.º 3 (2019): 37-51.
29. Luis G. Velásquez Pérez, "Crisis política en Guatemala: El papel de las organizaciones sociales urbanas y de los actores políticos e institucionales entre 2015-2016" (tesis de BA, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2018).
30. Elisabeth Malkin, "Guatemala President Who Championed Honesty Orders Anticorruption Panel Chief Out", *New York Times*, 27 de agosto de 2017, [www.nytimes.com/2017/08/27/world/americas/jimmy-morales-guatemala-corruption.html](http://www.nytimes.com/2017/08/27/world/americas/jimmy-morales-guatemala-corruption.html).
31. Elizabeth J. Zechmeister y Dinorah Azpuru, "What Does the Public Report on Corruption, the CICIG, the Public Ministry, and the Constitutional Court in Guatemala?", Tropical Brief n.º 29, Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University, 31 de agosto de 2017, [www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB029en.pdf](http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB029en.pdf).
32. Reuters, "Son, Brother of Outgoing Guatemalan President Cleared of Fraud", *Al Jazeera*, 19 de agosto de 2019, [www.aljazeera.com/news/2019/08/son-brother-outgoing-guatemalan-president-cleared-fraud-190819203947970.html](http://www.aljazeera.com/news/2019/08/son-brother-outgoing-guatemalan-president-cleared-fraud-190819203947970.html).
33. Jody García y Martín Rodríguez Pellecer, "Todos cometimos delitos, pero la CICIG no fue pareja y politizó todo", *Nomada*, 27 de octubre de 2018, [www.nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo](http://www.nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo).
34. WOLA, "Fact Sheet: The CICIG's Legacy in Fighting Corruption in Guatemala", 27 de agosto de 2019, [www.wola.org/analysis/cicigs-legacy-fighting-corruption-guatemala](http://www.wola.org/analysis/cicigs-legacy-fighting-corruption-guatemala).
35. García y Rodríguez Pellecer, "Todos cometimos delitos, pero la CICIG no fue pareja y politizó todo".
36. Jody García, "Jimmy, Baldizón y estos mega-empresarios organizaron el lobby contra Todd y la CICIG (parte 1)", *Nomada*, 11 de octubre de 2018, [www.nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contra-todd-y-la-cicig-parte-1](http://www.nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contra-todd-y-la-cicig-parte-1).
37. Steven Dudley y Felipe Puerta, "Guatemala Accusations Amp Up Tensions Between Presidency, AG's Office", *InSight Crime*, 16 de mayo de 2018, [www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-accusations-amp-tensions-presidency-ag-office](http://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-accusations-amp-tensions-presidency-ag-office).
38. Héctor Silva Ávalos, "Guatemala President Causes Constitutional Crisis to Oust CICIG", *InSight Crime*, 8 de enero de 2019, [www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-causes-constitutional-crisis-oust-cicig](http://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-causes-constitutional-crisis-oust-cicig).
39. Lauren Carasik, "Guatemala's 'Slow-Motion Coup' Rolls Onward", *Foreign Policy*, 26 de enero de 2019, [www.foreignpolicy.com/2019/01/26/guatemalas-slow-motion-coup-rolls-onward](http://www.foreignpolicy.com/2019/01/26/guatemalas-slow-motion-coup-rolls-onward).
40. Javier Estrada Tobar, "El Pacto de Corruptos 2.0, resumido en 5 puntos", *Nomada*, 4 de abril de 2018, [www.nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-pacto-de-corrupptos-2-0-resumido-en-5-puntos](http://www.nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-pacto-de-corrupptos-2-0-resumido-en-5-puntos).
41. Flores, "Youth-Led Anti-Corruption Movement".
42. CICIG, "Informe: 'Bots, netcenters y el combate a la impunidad. El caso de Guatemala'", comunicado de prensa, 20 de mayo de 2019, [www.cicig.org/cicig/informes\\_cicig/informes-tematicos/bots-netcenters-y-el-combate-a-la-impunidad](http://www.cicig.org/cicig/informes_cicig/informes-tematicos/bots-netcenters-y-el-combate-a-la-impunidad).
43. CICIG, "Presentan el informe final de labores de la CICIG: el legado de justicia en Guatemala", comunicado de prensa, 20 de agosto de 2019, [www.cicig.org/cicig/informes\\_cicig/informe-de-labores/informe-final-de-labores](http://www.cicig.org/cicig/informes_cicig/informe-de-labores/informe-final-de-labores).
44. Honduras adoptó un modelo similar al de la CICIG con la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2016. La MACCIH, respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se centró en mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia del país. Su objetivo era trabajar junto a las instituciones hondureñas para combatir la corrupción y la impunidad y fortalecer la eficacia del sistema judicial penal. La MACCIH cesó sus operaciones en enero de 2020, luego de que las negociaciones entre el gobierno de Honduras y la OEA no lograran el acuerdo necesario para la renovación del mandato de la misión. Ver OEA, "Statement of the OAS General Secretariat on the Conclusion of the MACCIH", comunicado de prensa, 17 de enero de 2020, [www.oas.org/en/media\\_center/press\\_release.asp?sCodigo=E-003/20](http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-003/20). Para ver más debates sobre los mandatos, tanto de la CICIG como de la MACCIH, así como el análisis sobre el impacto y el legado de las dos instituciones, ver Charles T. Call, "International Anti-Impunity Missions in Guatemala and Honduras: What Lessons for El Salvador?", American University Center for Latin American and Latino Studies, CLALS Working



Paper Series n.º. 21, junio de 2019, [www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/international-anti-impunity-missions-in-guatemala-and-honduras-what-lessons-for-el-salvador-rev4.pdf](http://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/international-anti-impunity-missions-in-guatemala-and-honduras-what-lessons-for-el-salvador-rev4.pdf).

45. CICIG, “Presentan el informe final de labores de la CICIG: el legado de justicia en Guatemala”, 20 de agosto de 2019, [www.cicig.org/cicig/informes\\_cicig/informe-de-labores/informe-final-de-labores/](http://www.cicig.org/cicig/informes_cicig/informe-de-labores/informe-final-de-labores/).
46. WOLA, “Fact Sheet: The CICIG’s Legacy.”
47. Crisis Group, “Saving Guatemala’s Fight Against Crime and Impunity”, *Latin America & Caribbean Report* no. 70, 24 de octubre de 2018, [www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/70-saving-guatemalas-fight-against-crime-and-impunity](http://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/70-saving-guatemalas-fight-against-crime-and-impunity).
48. Abigail Bellows, “Bridging the Elite-Grassroots Divide Among Anticorruption Activists”, Carnegie Endowment for International Peace, enero de 2020, [www.carnegieendowment.org/files/WP\\_Bellows\\_EliteGrassroots.pdf](http://www.carnegieendowment.org/files/WP_Bellows_EliteGrassroots.pdf).
49. Jo-Marie Burt y Paulo Estrada, “CICIG, Leader of Anti-Corruption Efforts in Guatemala, Under Siege (Part I)”, *International Justice Monitor*, 2 de octubre de 2017, [www.ijmonitor.org/2017/10/cicig-leader-of-anti-corruption-efforts-in-guatemala-under-siege-part-i](http://www.ijmonitor.org/2017/10/cicig-leader-of-anti-corruption-efforts-in-guatemala-under-siege-part-i).
50. Sofia Menchu, “Guatemala Lawmakers Curb Penalties for Illegal Election Financing”, Reuters, 13 de septiembre de 2017, [www.reuters.com/article/us-guatemala-corruption-idUSKCN1BP043](http://www.reuters.com/article/us-guatemala-corruption-idUSKCN1BP043).
51. Burt y Estrada, “CICIG, Leader of Anti-Corruption Efforts”.
52. Alberto Pradilla, “#Paro20S: La plaza vuelve a llenarse, esta vez en dos tiempos”, Plaza Pública, 20 de septiembre de 2017, [www.plazapublica.com.gt/content/paro20s-la-plaza-vuelve-llenarse-esta-vez-en-dos-tiempos](http://www.plazapublica.com.gt/content/paro20s-la-plaza-vuelve-llenarse-esta-vez-en-dos-tiempos).
53. Burt y Estrada, “CICIG, Leader of Anti-Corruption Efforts”.
54. Burt y Estrada, “CICIG, Leader of Anti-Corruption Efforts”.
55. Sandra Cuffe, “Guatemala Health Officials Fired, Investigated for Corruption”, *Al Jazeera*, 21 de abril de 2020, [www.aljazeera.com/news/2020/04/guatemala-health-officials-fired-investigated-corruption-200421215028285.html](http://www.aljazeera.com/news/2020/04/guatemala-health-officials-fired-investigated-corruption-200421215028285.html).
56. Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, “Bipartisan House Leaders Urge Guatemalan President to Reject Undemocratic NGO Law”, comunicado de prensa, 26 de febrero de 2020, <https://foreignaffairs.house.gov/2020/2/bipartisan-house-leaders-urge-guatemalan-president-to-reject-undemocratic-ngo-law>.
57. Ver, por ejemplo, Adeline Hite y Adriana Beltrán, “Q&A: Guatemala’s Controversial NGO Law”, WOLA, 19 de marzo de 2020, <https://www.wola.org/analysis/qa-guatemalas-controversial-ngo-law>.
58. Cindy Espina, “Organizaciones se retiran de la discusión de Gobierno Abierto”, *El Periódico*, 6 de octubre de 2018, <https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/10/06/organizaciones-se-retiran-de-la-discusion-de-gobierno-abierto>.
59. Espina, “Organizaciones se retiran de la discusión de Gobierno Abierto”.
60. Nina Lakhani, “Corrupt Guatemalan Officials Find Help from an Unlikely Source: Marco Rubio”, *The Guardian*, 17 de mayo de 2018, [www.theguardian.com/world/2018/may/17/guatemala-marco-rubio-corruption](http://www.theguardian.com/world/2018/may/17/guatemala-marco-rubio-corruption).
61. Embajada de Estados Unidos en Guatemala, “The United States Is Committed to Fighting Corruption and Impunity”, comunicado de prensa, 31 de agosto de 2018, <https://gt.usembassy.gov/the-united-states-is-committed-to-fighting-corruption-and-impunity>.
62. Davin O’Regan, “Donor Assistance in the Transparency and Accountability Movement”, *Peaceworks* n.º. 151, United States Institute of Peace, septiembre de 2019, [www.usip.org/publications/2019/09/donor-assistance-transparency-and-accountability-movement](http://www.usip.org/publications/2019/09/donor-assistance-transparency-and-accountability-movement).
63. Entrevista en la Ciudad de Guatemala el 24 de junio de 2019.

## ACERCA DEL INSTITUTO

---



El United States Institute of Peace es un instituto nacional, no partidario e independiente, fundado por el Congreso y dedicado a la propuesta de que un mundo sin conflictos violentos es posible, práctico y esencial para la seguridad de los Estados Unidos y del mundo. En zonas de conflicto en el extranjero, el Instituto trabaja con socios locales para prevenir, mitigar y resolver conflictos violentos. Para reducir futuras crisis y la necesidad de intervenciones costosas, el USIP trabaja con los gobiernos y las sociedades civiles para ayudar a sus países a resolver los problemas de forma pacífica. El Instituto ofrece experiencia, capacitación, análisis y apoyo a quienes trabajan para construir un mundo más pacífico e inclusivo.

## JUNTA DIRECTIVA

---

Stephen J. Hadley (presidente), director, Rice, Hadley, Gates & Manuel LLC, Washington, DC • George E. Moose (vicepresidente), profesor adjunto de Práctica, The George Washington University, Washington, DC • Judy Ansley, exasistente del presidente y viceasesora sobre Seguridad Nacional durante el mandato del presidente George W. Bush, Washington, DC • Eric Edelman, profesional docente en ejercicio en Residencia en Roger Hertog, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, DC • Joseph Eldridge, profesional docente en ejercicio distinguido, School of International Service, American University, Washington, DC • Kerry Kennedy, presidente, Robert F. Kennedy Human Rights, Washington, DC • Ikram U. Khan, presidente, Quality Care Consultants, LLC, Las Vegas, NV • Stephen D. Krasner, Graham H. Stuart Professor of International Relations, Stanford University, Palo Alto, CA • John A. Lancaster, exdirector ejecutivo, International Council on Independent Living, Potsdam, NY • Jeremy A. Rabkin, profesor de Derecho, Antonin Scalia Law School, George Mason University, Arlington, VA • J. Robinson West, expresidente, PFC Energy, Washington, DC • Nancy Zirkin, vicepresidente ejecutiva, Leadership Conference on Civil and Human Rights, Washington, DC

### Miembros de derecho

Mike Pompeo, secretario de estado • Mark T. Esper, secretario de defensa • Frederick J. Roegge, vicealmirante, Armada de EE. UU.; presidente, National Defense University • Joe Lataille, presidente en funciones; director financiero, United States Institute of Peace (sin voto)

## ACERCA DE LA PRENSA DEL INSTITUTO ESTADOUNIDENSE DE PAZ

---

Desde su creación en 1991, United States Institute of Peace Press ha publicado cientos de influyentes libros, informes y resúmenes sobre la prevención, el manejo y la resolución pacífica de conflictos internacionales. Todos nuestros libros e informes surgen de la investigación y el trabajo de campo patrocinados por los numerosos programas del Instituto, y estamos comprometidos a extender el alcance del trabajo del Instituto a través de la publicación de documentos significativos y sostenibles para profesionales, intelectuales, diplomáticos y estudiantes. Cada obra se somete a una rigurosa revisión por pares llevada a cabo por expertos en la materia externos para garantizar que la investigación y las conclusiones sean equilibradas, relevantes y estén fundamentadas.

## OTRAS PUBLICACIONES DEL USIP

---

- *North Korean Phone Money: Airtime Transfers as a Precursor to Mobile Payment System* por Yonho Kim (Informe especial, septiembre de 2020)
- *Lessons Learned in the Search for COVID-19 Ceasefires* por Tyler Jess Thompson (Informe especial, septiembre de 2020)
- *How to Engage the Enemy: The Case for National Security Diplomacy with North Korea* por Van Jackson (Informe especial, septiembre de 2020)
- *Preventing Sexual Exploitation and Abuse by Male Peacekeepers* por Jessica Anania, Angelina Mendes y Robert U. Nagel (Informe especial, septiembre de 2020)
- *Assessing Afghanistan's 2019 Presidential Election* por Colin Cookman (Peaceworks, agosto de 2020)



**UNITED STATES  
INSTITUTE OF PEACE**  
**Making Peace Possible**

2301 Constitution Avenue, NW  
Washington, DC 20037  
(202) 457-1700  
[www.USIP.org](http://www.USIP.org)